



LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: 1958-1998, EN EL PENSAMIENTO LIBERAL VENEZOLANO CONTEMPORÁNEO

Valoración Crítica

Representative democracy: 1958-1998, in contemporary venezuelan liberal thought
Critical Assessment

DAVID RUIZ CHATAING

Universidad Metropolitana, Venezuela

KEYWORDS

Century XX
1958-1998
Representative Democracy
Liberalism
Presidents
Market economy
Individual Responsibility

ABSTRACT

We address the optics on the social, political and economic regime emerged after 1958 until its collapse in 1998. We synthesize their strong criticism of the economic policies of the democratic governments. They denounced the lousy administration of enormous resources, the corruption, the inefficiency and the waste. Along with the acknowledgment that despite its flaws, there was a political democracy, the need for reforms is pointed out as a way to increase representation, citizen control, decentralization, and the full validity of the Rule of Law, market economy and individual responsibility.

PALABRAS CLAVE

Siglo XX
1958-1998
Democracia Representativa
Liberalismo
Presidentes
Economía de Mercado
Responsabilidad Individual

RESUMEN

Nos aproximamos a la óptica sobre el régimen político, económico y social surgido en Venezuela luego de 1958 hasta su colapso en 1998. Sintetizamos la dura crítica formulada por los liberales a las políticas económicas de los gobiernos democráticos. Denuncian la mala administración de enormes recursos, la corrupción, la ineficiencia y el despilfarro. Junto al reconocimiento de que, a pesar de sus fallas, existió la democracia política, se señala la necesidad de reformas en el sentido de aumentar la representatividad, el control ciudadano, la descentralización, la plena vigencia del Estado de Derecho, el libre mercado y la responsabilidad individual.

Recibido: 02/ 06 / 2022

Aceptado: 27/ 08 / 2022

1. Introducción

El presente trabajo es para dejar registro de las opiniones, análisis, diagnósticos y propuestas de soluciones de un sector intelectual y político que fue poco escuchado en la Venezuela Moderna. Me refiero a los escritores venezolanos contemporáneos partidarios de la doctrina liberal. Como es ampliamente conocido, el siglo XX en el mundo, luego de la Primera Guerra Mundial y de la crisis de los años 30 del capitalismo internacional, se ha caracterizado por el abandono de las corrientes proclives a la economía de mercado y su reemplazo por concepciones cada vez más estatistas. La Revolución mexicana (1910), la revolución rusa (1917), el fascismo italiano (1922), el nazismo alemán (1933), las democracias occidentales con el Welfare State, el Estado de Bienestar, condujeron a la generalización de la idea de una fuerte intervención del Estado en la economía para resolver los problemas tanto del área de la producción como sociales. En Venezuela imperaron prácticas dirigistas, de planificación económica, desde el Gobierno del General Eleazar López Contreras (1936-1941) en adelante. Con el deterioro de la economía nacional producido durante los últimos años de la democracia representativa y la Revolución Bolivariana, resultó evidente el agotamiento tanto de la política de sustitución de importaciones como del rentismo petrolero y el estatismo. Quizá sea el tiempo de la democracia descentralizada, la sociedad civil, la propiedad privada, la economía social de mercado, la justicia conmutativa y la responsabilidad individual.

Esta temática ha sido poco estudiada en Venezuela y es muy reciente que se ha hecho acercamientos generales sobre el mismo. Por ello la importancia de estudiarla a fondo, dado que pudiese constituir una alternativa al colapso del estatismo y del populismo, visto que sus principios no lograron aplicarse como debiera en la economía de la Venezuela contemporánea.

La investigación es bibliográfica y documental. De tipo cualitativa. Indagamos en todo lo escrito por los autores escogidos sobre el tema. Expusimos sus análisis, argumentos, críticas, diagnósticos y propuestas de soluciones a los grandes problemas económicos, sociales y políticos nacionales. Consideramos este texto una contribución a la comprensión del pensamiento liberal venezolano contemporáneo que hay que seguir investigando.

2. El concepto de democracia

Sin hacer un seguimiento sistemático del concepto de democracia en los autores que vamos a trabajar, podemos registrar la idea de democracia que desarrolló Nicomedes Zuloaga Mosquera. En su escrito, Zuloaga (2001) afirma que el régimen democrático es el ejercicio temporal del gobierno por una mayoría que debe respetar a las minorías, plantea que los derechos, las garantías, son el contrapeso a la práctica del poder del Ejecutivo y del Legislativo.

Por su parte, Carlos Rangel, el pensador liberal venezolano más reconocido internacionalmente, es de la convicción de que la democracia es un sistema en el que el poder está desconcentrado y la diversidad de opiniones es tolerada. La mayoría gobierna, pero respeta a la minoría, pues, nadie tiene el monopolio de la verdad (Rangel, 1981). De acuerdo con su punto de vista, la democracia supone una armonía suficiente de los intereses antagónicos entre los individuos y grupos, los considera conciliables. apunta que el Estado, en un régimen democrático, es árbitro entre los diversos grupos sociales y esto es mejor que la guerra civil o la tiranía. Lamentablemente, en América latina, han sido los revolucionarios radicales y violentos los más publicitados. El mundo conoce a Fidel Castro o a Ernesto Ché Guevara por su iracunda epopeya. Pero desconoce las hazañas, la épica, de demócratas reformistas tales como Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Eduardo Frei y Carlos Andrés Pérez. Es el caso de Rómulo Betancourt quien adoptó la propuesta aprista y sustentado en una gran alianza, adelantó cambios estructurales graduales y reformistas. La creación de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), la reforma agraria, la industrialización, la derrota de alzamientos pretorianos y revolucionarios en un marco de respeto a las libertades no genera fama. La nacionalización del petróleo realizada por Carlos Andrés Pérez, concertada con las empresas extranjeras, no tiene gran reconocimiento (Rangel, 1981).

2.1. Democracia política sin libertades económicas

En general, los liberales venezolanos concuerdan en que ha existido la democracia política a pesar de sus fallas. El cuestionamiento ha sido más duro hacia el desempeño en el área económica. Por ello, Emeterio Gómez se dedicó a estudiar el pensamiento económico de uno de los fundadores de la democracia representativa en Venezuela, Rómulo Betancourt.

Según Gómez, para Betancourt, ante la debilidad de la burguesía, el Estado se abroga el papel de representar a la nación, sintetizaba el socialismo democrático, el nacionalismo económico, la democracia agraria y justicia social. Rómulo Betancourt era en esencia un antiliberal, contrario al sector financiero y comercial, Estatista cabal, partidario de la regulación de precios y de la rentabilidad de las empresas públicas. También fue un fervoroso antimperialista. El pensamiento económico de Betancourt se gestó en los años 30 y perdió vigencia a finales de la década de los sesenta. Sus ideas, no es su responsabilidad, han conformado una herencia, un legado de cultura de izquierda, anticapitalista, antilucro, tercermundista, antiestadounidense, que nos mantiene amarrados al pasado (Gómez, 1992).

Contra esas políticas económicas argumentará con firmeza, Zuloaga (2001) para quien, a partir de 1959, con el establecimiento de la democracia representativa, se implantaron políticas estatistas y populistas (altos impuestos, y control de cambio, entre otras), sumado al aumento de la inseguridad lo que hizo crecer la desconfianza y la desinversión. Igualmente hay que considerar la inestabilidad política debido a los alzamientos militares de derecha e izquierda y la insurrección guerrillera, tanto rural como urbana, como causas de la desconfianza y la desinversión. Zuloaga (2001) continúa su implacable denuncia del desastre económico y la crisis desatada por el gobierno de Rómulo Betancourt. En su opinión, se gastaron enormes sumas para continuar obras de la dictadura: creció la burocracia con fines exclusivamente clientelares; se costearon empresas públicas improductivas (Aeropostal, Mersifrica, transporte público, Sidor, la Petroquímica, etc.)

Esto condujo a un déficit presupuestario que se equilibró con más impuestos y endeudamiento externo. No debió ser así. Se sanea la administración gastando sólo lo que se tiene. Quien consume más de lo que tiene se arruina. Sea un pulpero o un Estado. El intervencionismo económico excesivo deterioró la economía. Entre las medidas oficiales que generaron malestar Zuloaga encontró: 1) La aprobación por el Congreso de la República de una Ley de Regulación de alquileres; 2) Los planes de emergencia, una economía deficitaria por exceso de gastos, los controles de cambio, los aumentos periódicos y reiterados de impuestos; 3) Los incrementos compulsivos de los salarios en momentos de crisis económica; 4) Ignorar los mecanismos del mercado para regular la economía. Esto ha conducido a la contracción del Producto Interno Bruto por debajo del crecimiento vegetativo de la población. Es decir, nos empobrecimos (Zuloaga, 2001).

Con motivo de aproximarse un nuevo proceso electoral presidencial, Zuloaga (2001) hizo un balance de la gestión del partido Acción Democrática. Denunció que se gastaron 28 millones de bolívares diarios. Para sufragar estos gastos aumentaron los impuestos directos e indirectos y el país se sumió en una crisis. La inversión neta descendió desde casi 4.000 millones en 1959 hasta sólo 2.500 millones en 1961. Al caer la inversión, aumentó el desempleo. Hasta 1959, el ingreso nacional crecía constantemente y así había aumentado de 8.600 millones en 1950 hasta aproximadamente 19.700 millones en 1959. La parte que correspondió a la remuneración del trabajo en la empresa privada aumentó en el mismo período de 4.200 millones en 1950 hasta cerca de 9.000 millones en 1959. En los años 1960 y 1961, el ingreso nacional permaneció estático. La burocracia aumentó hasta representar más de 3.000 millones de bolívares en 1961 (Zuloaga, 2001).

Otra política gubernamental cuestionada por Zuloaga (2001) es la conocida como Industrialización por sustitución de importaciones (I.S.I) promovida para toda América Latina por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Con esta surge un empresariado que no genera producción con una economía eficiente. Los altos aranceles a los productos importados, los subsidios, mantienen una estructura de privilegio. Son industrias artificiales, de invernadero, forzadas, que no pueden subsistir sin la materia prima importada. Podemos producir de todo porque tenemos los recursos. Se aspira una autarquía absoluta y eso es una utopía. Si nos atenemos a la Ley de la división internacional del trabajo y a la de las ventajas comparativas, debemos incentivar la producción de bienes que puedan generarse a bajo costo y colocarse en el mercado nacional e internacional, para así suplir al petróleo en la tarea de adquirir divisas duras. Además, ese producto costoso y de mala calidad es un impuesto injusto contra los consumidores.

La economía venezolana, que se recuperó durante el periodo constitucional de Betancourt, siguió por estos derroteros de populismo y estatismo en los gobiernos de Raúl Leoni y Rafael Caldera. La renta petrolera y la industrialización por sustitución de importaciones desempeñaron el principal estímulo para el crecimiento económico. No obstante, Romero (1987) subestimando un poco el aporte del liderazgo democrático al concebir el Pacto de Punto Fijo, señala que la democracia venezolana es una petrodemocracia: el petróleo fue el que lo hizo posible y pagó todas sus cuentas. En todo caso, hizo eclosión el dirigismo económico y el clientelismo durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez debido al alza inusitada de los precios del petróleo. La concepción de Pérez era convertir a Venezuela a corto plazo en una potencia industrial al invertir enormes dineros públicos en la economía tanto pública como privada. Desarrollar un sector privado productivo requiere tiempo, experiencia gerencial, tecnología e ingentes capitales de los que carecíamos. La política económica de Carlos Andrés Pérez benefició a un "empresariado" privilegiado que no estaba realmente interesado en el crecimiento ni de la industria, ni de la agricultura. Los recursos financieros entregados por el Estado a estos supuestos empresarios, los sacaron del país para construirse mansiones en Estados Unidos o abrir cuentas en bancos extranjeros. Por otro lado, la estatización de la economía se aceleró abruptamente. En 1977, la economía en control del Estado representaba alrededor del 60% del Producto Territorial Bruto. Las más importantes empresas del país pertenecen a la nación. El fracaso de la estrategia del V Plan de la Nación era evidente en 1976. Prácticamente todas las áreas económicas (manufactura, industria y agricultura) decrecieron. Las exportaciones no mineras no se materializaron. Se dispararon las importaciones. La balanza de pagos y la comercial eran deficitarias. Y las reservas internacionales descendieron un 21%. Aumentó la deuda externa e interna. Es decir, una debacle, un completo fracaso. Al iniciarse la caída de los precios petroleros al final del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el país se encontró en una situación precaria, desesperante (Romero, 1987).

2.2. La economía camino del desastre

Durante la administración de Luis Herrera Campíns (1979-1984), la situación continuó deteriorándose hasta arribar a la crisis del famoso *viernes negro* del 18 de febrero de 1983. Zuloaga (2001) atribuye la necesidad de devaluar el signo monetario nacional y establecer un control de cambio a la falta de confianza. Y esta se originó en el despilfarro, los privilegios de los que tenían negocios al amparo del poder; la mala administración de gigantescos recursos financieros; por el despojo de sus dólares a Petróleos de Venezuela; la burocracia y la corrupción.

Por su parte, Ball (1984) efectuó una aguda crítica a la partidización de toda la sociedad venezolana. En su estudio, cuestionó el control de cambio, la devaluación y el control de precios que pone a pagar la crisis a los comerciantes y empresarios. Para Ball las causas de la crisis económica fueron las siguientes: 1) Derroche de enormes recursos que ingresaron al Estado los últimos 10 años. 2) El contraer deudas externas pagaderas a corto plazo. Se adeudan 32 mil millones de bolívares. 3) El crecimiento inmanejable de la burocracia que ha pasado de 300.000 personas a más de 1.200.000 en 10 años. 4) El crecimiento de empresas estatales de 17 a 270 (y si se incluyen a las entidades autónomas son 380. Un crecimiento de 1000%). Además, las empresas estatales son una competencia desleal con respecto al sector privado: no están obligadas a tener un retorno de la inversión; disponen de capital ilimitado; no pagan impuestos; ni servicios como el agua, electricidad; disponen de dólares preferenciales. 5) El incremento de la permisología que encarece los costos de producción. A esto se suma la suspensión desde los años 60 de las libertades económicas y un sector empresarial que no defiende la economía de mercado.

De igual modo, Ball (1984) plantea que con la crisis económica aumentó el desempleo y disminuyó el poder adquisitivo del venezolano: "Venezuela se encuentra en franco retroceso porque tenemos una de las mayores tasas de crecimiento poblacional del mundo, acompañado de cero crecimientos del producto territorial bruto" (pp. 15-17). Atribuye también a la concentración del poder político y económico en pocas manos, el aumento exponencial de la corrupción, la salida de capitales, la devaluación, el derroche de enormes recursos económicos y el aplastamiento de las libertades económicas individuales. Ball ofrece unos números desquiciantes de esos años: "Los gastos corrientes del sector público, como porcentaje del PTB, saltaron de 18, 2 por ciento en 1974 a 39, 5 por ciento en el año esquizofrénico de 1982" (p. 11).

En ese sentido, Gómez (1991) se pronunció sobre la política económica del gobierno de Carlos Andrés Pérez como causante de la crisis económica de los años ochenta. Este violentó todos los equilibrios macroeconómicos básicos: balanza de pagos, el presupuesto fiscal y el sector monetario. Permitir que las importaciones llegasen en 1977 a 40% del PTB; la plena ocupación lograda a base de empleos improductivos y artificiales y el sistema de prestaciones dobles fueron gravísimos errores. En cuanto a la gestión del presidente Herrera Campíns, Gómez (1986), explica que la carencia de una política económica coherente, condujo al estímulo de las autoridades a la salida de capitales para controlar la inflación, así como la insistencia de superar las dificultades aumentando el gasto público, los subsidios y los controles. Señalando además que se sacrificaron los equilibrios macroeconómicos básicos a la meta de un acelerado crecimiento económico. La abundancia de recursos repercutió en que prácticamente ni hubiese una política económica seria. Herrera Campíns se desenvolvió entre marchas y contramarchas en un programa de economía de mercado según bajaran o subieran los precios del petróleo y supeditó a fines políticos y electorales la elevación del gasto público cuando debió aplicar medidas de austeridad. La ejecución de grandes obras en menos tiempo que podían hacerse en 20 años, generó gastos insostenibles. Las administraciones y las ideologías socialdemócrata y socialcristiana padecen: "el desconocimiento de la dimensión económica del humano" (p. 36).

A Luis Herrera Campíns lo sucede Jaime Lusinchi, de este se esperaba las rectificaciones para salir del atolladero. Ball (1984) le escribe al nuevo presidente de Venezuela, solicitándole el restablecimiento de las libertades económicas, reglas de juego claras, dejar trabajar a los empresarios en función de obtener ganancias que motiven nuevas inversiones. En su opinión hay un fracaso evidente del estatismo, del populismo demagógico y electorero. Se han desperdiciado enormes recursos y ha crecido la burocracia que lo que hace es entorpecer la actividad económica. Ball afirma que existen libertades políticas, pero no las económicas. Las políticas económicas estatistas provienen desde los tiempos coloniales. El intervencionismo económico se sustenta en los privilegios y en la corrupción que genera para un grupo de privilegiados y burócratas. El estatismo conduce al control de los hombres y a la pérdida de la libertad.

Estas y otras críticas referidas a la violación de la libertad de expresión por parte del gobierno llegarían a costarle a Carlos Ball, fuertes desavenencias hasta que se vio obligado a exiliarse. Las represalias también alcanzaron a Nicomedes Zuloaga Mosquera, quien fue hecho preso por denunciar las mafias judiciales y los garrafales errores en el desempeño económico del gobierno. Quedó libre, tras excarcelación bajo el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (1989-1993).

3. El Gran Viraje 1989-1992

De este creciente malestar y el colapso de las finanzas nacionales surgió la necesidad de un cambio profundo de rumbo. En opinión de Sabino (1999), Carlos Andrés Pérez durante su segunda administración (1989-1994)

formuló su gran viraje, por cierto, muy distinto de las promesas ofrecidas durante la campaña electoral: liberación de los precios de los servicios públicos y el combustible, mayor protagonismo del sector empresarial privado, eliminación de los subsidios y disminución del papel del Estado en la sociedad y en la economía. De hecho, los resultados cuantitativos de los primeros dos años de aplicación del programa económico fueron sorprendentes, Gómez (1991) precisa como principales logros la reducción de la inflación de 81 a 36%, el pasar la balanza de pagos de un déficit de 4.600 millones de dólares en 1988 a un superávit de 3.700 millones en 1991 y la conversión del fuerte déficit fiscal de 1988 (9,3% del PIB) en superávit en 1990 (0,8 del PIB).

A pesar de los logros macroeconómicos, la percepción de la ciudadanía era que el país estaba sumido en la frustración y la violencia. Las medidas de rectificación se aplicaron luego de 10 años de deterioro económico y social que agotó, en cierta forma, las alternativas viables. De acuerdo con Romero (1994) Carlos Andrés Pérez, tenía una óptica cortoplacista de los cambios estructurales. Y ello chocaba con la falta de eficacia en los organismos del Estado, ni costumbres administrativas de evaluación para mejorar las políticas públicas y sostenerlas en el tiempo.

Gómez (1991) observa más bien dificultades para establecer una nueva visión de la economía. El gasto público seguía desbordado, el mercado de trabajo era muy rígido y no mostraba la flexibilidad que se requería para competir en los mercados externos. La privatización de empresas del Estado, la reforma tributaria y del poder judicial se iniciaron no sin obstáculos y con mucho retardo. El problema fundamental del programa económico del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, señala, Emeterio Gómez, es que hay en realidad dos programas. Uno explícito y otro implícito. El primero sostiene que hay que diversificar la economía, estimular las exportaciones no tradicionales, establecer la primacía del capital privado y la ruptura de la dependencia del petróleo. Disminuir el gasto público y el tamaño del Estado. El programa implícito consiste en una inversión masiva para reforzar el carácter petrolero de la economía. A esto se unen megaproyectos destinados a explotar nuestras ventajas comparativas en petroquímica, energía, aluminio, y en general, productos primarios y agricultura tropical. El predominio de este segundo programa incide en la revaluación de nuestro signo monetario por los enormes recursos financieros que le ingresan al país. Y en que no tengan sentido las periódicas devaluaciones para mantener subvaluado el bolívar y hacer competitivas nuestras exportaciones no tradicionales. Uno de los peligros del programa implícito es el fortalecimiento del capitalismo de Estado y el debilitamiento de la sociedad civil. La indefinición de llevar adelante dos programas contradictorios, el explícito y el implícito, pueden conducir al fracaso de las reformas (Gómez, 1991).

De manera que las reformas fracasaron por una visión cortoplacista de los cambios, por no estar preparada la organización del Estado ni la sociedad venezolana para ellos. Igualmente se invocó una economía de mercado: "y, al mismo tiempo, hacer crecer desmesuradamente el gasto público y la oferta monetaria, mediante la emisión cambiaria de dinero inorgánico" (Gómez, 1994, p. 5). Por Carlos Andrés Pérez confiar excesivamente en su liderazgo y no hacer suficiente política para ganar apoyos para las transformaciones, se crearon las condiciones para el estallido social del 27 y 28 de febrero de 1989, los intentos de golpes de Estado en 1992, su final destitución en mayo de 1993 por el mal uso de la partida secreta. En fin, todo un escenario controvertido que hizo calar la idea del fracaso del llamado paquetazo económico neoliberal, como como en forma interesada voceaban grupos de izquierda radical. Al respecto sostiene Sabino (1992):

El país cambio de rumbo, pero se encontró sin un liderazgo efectivo que pudiese explicarle a donde se encaminaba, porqué tenía que realizar sacrificios, como era el modelo de sociedad al que se pretendía arribar. La legitimidad del sistema político vigente ya había sido erosionada severamente por sus visibles fracasos económicos, por un sistema de partidos que perdía representatividad y por la generalizada e impune corrupción. El cambio de rumbo económico sirvió para mostrar con más nitidez, si se quiere, la menguante legitimidad de nuestra dirigencia: la violencia anónima de febrero de 1989, la creciente abstención electoral y el respaldo implícito que tuvo la reciente tentativa golpista, no dejan dudas al respecto (p. 5).

3.1. El estallido social, el Caracazo

Zuloaga (2001) atribuye el estallido social de 1989 en las principales ciudades del país a la ausencia real de un Estado de Derecho, al sistema prevaleciente de privilegios, subsidios y corrupción, a la partidización del poder judicial, a un poder legislativo que se abocó a generar leyes inútiles y tendientes a producir la arbitrariedad de los funcionarios. Zuloaga denuncia que hay dos tipos de "ricos" empresarios en Venezuela. Unos que prosperan ofreciendo buenos productos y servicios compitiendo en el marco del mercado. Y otros que han hecho fortunas protegidos por las políticas del gobierno. Tras la suspensión de las garantías económicas establecidas en la Constitución de 1961, se fomentaron fortunas con la moneda barata, se incrementaron los millonarios con los créditos recibidos mediante la Corporación Venezolana de Fomento, aumentaron los adinerados al contraerse una enorme deuda externa con intereses variables y nacieron muchas fortunas con el sistema de establecer márgenes de ganancia desde el Estado a las empresas protegidas. También surgieron adinerados con los alimentos subsidiados que se contrabandeaban hacia el exterior. El sistema de control de cambio enriqueció a

muchos gracias al denominado dólar preferencial para adquirir divisas. Con todo, Zuloaga, reconoce al presidente Carlos Andrés Pérez el hecho de hacer el esfuerzo de sanear la economía, intentando promover una economía de mercado a partir de 1989.

Por entonces, en algunos círculos económicos y políticos tomaba cuerpo la idea que la salida a la crisis consistía en ir hacia una economía de mercado y hacia la democratización del Estado (Granier, 1984, 1987) y (Torres, 1994, 1995 y 2001). El deterioro económico y social, unido a la incapacidad de la alta dirigencia de los partidos políticos tradicionales para efectuar profundas rectificaciones, alimentaron la sensación que el país estaba a la deriva. En medio de aquella situación de crisis, el populismo y la demagogia seguía alimentando falsas expectativas. Ejemplo de ello fue la propuesta de una nueva Ley del Trabajo, preparada por el ex presidente Rafael Caldera, que establecía un régimen de prestaciones sociales compulsivas. Al respecto, Zuloaga (2001) señaló que lo único que realmente mejoraba el salario del trabajador es el aumento de la productividad. Y para lograr ese objetivo, se requiere inversión, maquinarias, educar al trabajador para que pueda producir más y mejor.

Con los problemas económicos se hace evidente también una crisis de la representatividad de la democracia. Zuloaga (2001) demanda el establecimiento del voto uninominal para que el electorado conozca mejor y controle a quienes van a desempeñar funciones públicas y mejore así la viciada democracia. Se requería una despartidización del Poder Judicial para aumentar la independencia de los jueces. A la crisis económica, se suman la social y la del sistema político. La sociedad civil que en Venezuela se crea a partir de la muerte del General Juan Vicente Gómez, pero sobre todo durante la democracia establecida a partir de 1958, presiona con sus múltiples reclamos y demandas. Se habla de Asamblea Constituyente y de reformas constitucionales. Se insistía en borrar de la Carta Magna vigente sus excesivas promesas populistas. A todas las dificultades anteriores se suma el sector bancario nacional. Quiebras de bancos, fuga de capitales, inflación, desempleo, aumento de la exclusión social y regresiva distribución del ingreso que se habían reducido durante los años 60.

3.2. La reacción del gobierno de Caldera: más populismo

Luego del interinato del Doctor Ramón J. Velásquez (1993), arriba a la Presidencia de la República, por segunda vez, el Doctor Rafael Caldera (1994-1999). Según Romero (1997) a diferencia del segundo gobierno de Pérez, Caldera se presenta como un fervoroso partidario del estatismo y populista practicante. La demagogia de Caldera fue estabilizadora porque hizo lo que la gente quería. Este gobernante tuvo la suerte de que las energías de los sectores populares y medios estaban agotadas luego de la excesiva agitación de los años 1989-1993. Las políticas populistas agravaron la situación del país, pero la manipulación política calderista permitió evitar el colapso político. En 1996, Caldera se ve obligado a realizar un programa de ajustes similar al de Pérez en 1989. El líder socialcristiano tuvo el apoyo de las élites políticas, del sector privado, del sindicalismo organizado y de la Iglesia. Esto contuvo la catástrofe de lo público. El miedo fue el gran protagonista de la política de estos años. El terror a otros estallidos sociales, modera a las élites y a los sectores populares. Mientras tanto el país continuaba deteriorándose y los protagonistas del golpe del 4 de febrero de 1992 son convertidos en héroes populares por cierta propaganda interesada.

La crisis económica y social ha modificado las lealtades del venezolano. Se ha dicho que el habitante de este país ama la democracia, pero según diversos estudios de opinión consultados por Romero (1997), predominan en las creencias nacionales el autoritarismo, la violencia y el clientelismo. Los venezolanos han tenido una relación utilitaria con el régimen democrático. Mientras le ha suministrado lo que necesitan, lo respaldan. Pero al deteriorarse la situación económica y social, han surgido una serie de conceptos personalistas y clientelares. Venezuela es rica y todos debemos tener nuestra parte. El Estado es al que toca repartirla. Si hay pobres es porque hay ricos que se apropian de toda la fortuna. La élite que dirige el Estado malgasta, despilfarra, roba, la prosperidad de todos. Estas creencias las refuerzan la demagogia electoral y el clientelismo. Refuerzan el distribucionismo y aleja la conducta eficiente y competitiva. La población, ante el deterioro económico y social, opta por la demagogia y el mesianismo. Por esto es explicable el apoyo a los golpistas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992.

Romero (1997) critica a Rafael Caldera que se hizo eco de la acción ilegítima de los golpistas para obtener dividendos políticos de cara al próximo proceso electoral. Algunos intelectuales, tales como Juan Liscano y Arturo Uslar Pietri se entregaron a la exaltación mesiánica de los golpistas. Las limitaciones culturales y psicológicas del pueblo venezolano también estuvieron presentes para obstaculizar las políticas de cambio. El liderazgo democrático con su estilo populista y mesiánico lo que han hecho es reforzar los vicios, las distorsiones. No cumplió el papel ductor de preparar a la población para cambiar del estatismo a la economía de mercado. El paternalismo, la baja confianza en las instituciones, la distancia entre las normas y la realidad, la mentalidad mágico-religiosa e igualitaria que da importancia a la solidaridad y se la resta a la competitividad. El predominio de lo emocional sobre lo racional. Bajos niveles de información y superficialidad en lo cognitivo. Sobrestimación del país (nos consideramos potencia económica y hasta militar). La carencia de memoria y conciencia histórica. La gente no tiene la menor idea de lo que ha acontecido en la historia de Venezuela y mucho menos en las últimas décadas. Todo esto limita severamente las reformas estructurales hacia el cambio y la responsabilidad individual.

En estos autores liberales, en general, es evidente una subvaloración de los logros y realizaciones de Venezuela en el siglo XX, en especial, el establecimiento de la democracia representativa y sus logros. Puede ser falta de perspectiva histórica y un énfasis en las coyunturas concretas de tiempos recientes. Otro aspecto interesante a destacar es el espíritu americanista en sus escritos. Se reflexiona sobre Venezuela en el contexto de Latinoamérica. En especial, Carlos Rangel, Carlos Sabino y Aníbal Romero.

3.3. Las soluciones a la crisis

Pero avancemos, ya para finalizar, en las propuestas de solución de estos autores liberales venezolanos ante la crisis nacional, todos de una u otra forma, concuerdan que hay que cambiar la estructura legal del país para propiciar los cambios requeridos. Gómez (1992) analiza el marco constitucional en el que se llevó a cabo el programa económico durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, al respecto afirma que esta Carta Magna está hecha para la solidaridad y deja a un lado la necesidad de educar en la competencia y la economía de mercado. También tiene carencias en el sentido de no propender explícitamente a la propiedad privada. Hay una abrumadora presencia de la idea de justicia social, actividad del Estado en la economía y prevalece la idea de justicia distributiva. No hay sentido de responsabilidad individual. El Estado provee todo. Si queremos construir una economía competitiva, debemos destacar la propiedad privada, la iniciativa individual y la economía de mercado.

Por su lado, Romero (1996) sugiere que, ante el deterioro económico, social y político del país, era necesario rectificar, tomar cambio de rumbo urgente. A tal efecto, expuso que la democracia venezolana se manejaba entre varias opciones: recuperar la democracia, el golpe de Estado, el cesarismo o una democracia debilitada forzada a las prácticas autoritarias y embestida por una gran conflictividad social. Se necesitaba un Estado fuerte en el sentido que cumpla un papel orientador y regulador en cuestiones claves de nuestro desarrollo; lo cual exige fortalecer la sociedad civil, la iniciativa privada y el mercado como mecanismo medular de nuestras relaciones económicas domésticas e internacionales. El Estado liberado de funciones que no le corresponden, debe concentrarse en mejorar la salud y la educación del pueblo. Las soluciones son políticas; hay que mejorar la calidad del liderazgo nacional. Una élite dirigente honesta, capacitada, que sepa informar la verdadera situación del país a los ciudadanos, los sacrificios que hay que hacer y el modelo de sociedad que se aspira construir. Hay que edificar un nuevo consenso, surgido del debate de ideas.

En lo referente a la actividad productiva, Gómez (1994) proponía a la dirigencia nacional, concentrarse en las actividades económicas donde tenemos ventajas comparativas y competitividad internacional. Estas no son otras que el petróleo, petroquímica, oro, aluminio, hierro, turismo y agricultura tropical. Avanzar en los procesos de privatización de las empresas del Estado, incluida la emblemática Petróleos de Venezuela (PDVSA). Hacer un gran esfuerzo educativo y cultural para hacer ver en la población el significado e importancia de la propiedad privada y la rentabilidad. Se debía modificar la Constitución para fortalecer los derechos económicos y restablecer las libertades económicas. Adelantar la reforma laboral para aumentar la productividad y la competitividad internacional, acompañado de la eliminación de la protección a los productores ineficientes para en cambio defender a los consumidores.

En otro texto, Gómez (2005) subrayaba que resultaba imprescindible armar una ética colectiva y ello pasaba por superar el viejo esquema de división de la sociedad venezolana en pobres y ricos. A tal efecto, se debía hacer un gran esfuerzo, para, más allá de la diversidad, formar valores comunes en todos los ciudadanos de esta nación. Se requerían ideales, una utopía por la cual luchar.

4. Conclusiones

Estudiamos el pensamiento de los liberales un sector intelectual de Venezuela que han sido poco tomados en cuenta. Sintetizamos sus argumentos, críticas, análisis, diagnósticos, soluciones y propuestas para resolver los problemas económicos, sociales y políticos del país. Los liberales venezolanos reconocen la existencia de la democracia política, con sus fallas, pero cuestionan con dureza las políticas económicas de los gobiernos democráticos.

El intervencionismo del Estado que se manifiesta en impuestos excesivos, controles de precios, de cambio y nacionalizaciones, aleja las inversiones y desata la inflación, el desempleo y disminuyen, en consecuencia, el crecimiento económico. Esto genera desconfianza y con ella se alejan los capitales nacionales y extranjeros de la economía nacional. El crecimiento excesivo de la burocracia, el gasto en políticas clientelares, el incremento de las empresas públicas deficitarias, los aumentos compulsivos de los salarios hacen crecer los gastos que se cubren con impuestos y endeudamiento externo. Una sana administración consume sólo lo que tiene. El que gasta más de lo que le ingresa se arruina. Sea un pulpero o un Estado.

Cuestionan los liberales la conocida como "Industrialización por sustitución de Importaciones". Se fundaron empresas sin tomar en cuenta su rentabilidad ni competitividad. Se las protegió con altos aranceles y hasta con la fijación de cuotas de ganancia. Estas empresas requirieron importar hasta la materia prima para poder producir. Además, ese producto es costoso y de mala calidad. Se perjudica a los consumidores.

La democracia venezolana existió no gracias a la clarividencia de la clase dirigente sino a los recursos que aportó la explotación petrolera. Somos una petrodemocracia.

Se responsabiliza en especial al primer gobierno de Carlos Andrés Pérez de la crisis económica de Venezuela. Este gobernante incorporó a una economía pequeña, enormes recursos financieros que la intoxicaron. Se disparó la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia en el manejo de los recursos. Se estatizó la economía y al bajar los precios petroleros se arribó al colapso. Aumentó la deuda externa y su pago significó una enorme erogación para la nación.

Las administraciones posteriores, las de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, discurrieron entre aplicar medidas de ajustes estructurales y seguir con las viejas políticas de aumentar el gasto público y los controles para generar crecimiento económico.

Durante la segunda administración de Carlos Andrés Pérez se intentó un programa económico hacia la eficiencia y la competitividad. La sociedad respondió con estallidos sociales, golpes de Estado y la clase dirigente, con la expulsión del poder de Carlos Andrés Pérez. Las sucesivas administraciones, en especial el segundo gobierno de Rafael Caldera, trató de paliar la crisis con políticas anacrónicas hasta verse obligado a aplicar un programa similar al de Pérez. El país se fue deteriorando en el plano económico y social, y políticamente la población optó por el autoritarismo y el mesianismo.

Los liberales propusieron, para enfrentar la crisis, en el plano económico, optar por la economía de mercado, que Venezuela se concentre en las actividades en las que tenga ventajas comparativas: petróleo, petroquímica, oro, aluminio, hierro, turismo y agricultura tropical. Proponen democratizar las acciones de Petróleos de Venezuela vendiéndolas en el mercado de valores nacional e internacional. Acelerar la privatización de empresas públicas quebradas. Fortalecer la educación para el trabajo y la productividad. Adelantar la reforma laboral que haga competitivo nuestro mercado de trabajo. Eliminar la sobreprotección a productores ineficientes, Controlar la inflación evitando la generación de dinero inorgánico. Realizar la reforma tributaria para disminuir la dependencia del Estado de la renta petrolera, entre otras medidas. Políticamente, profundizar la descentralización y la democratización del Estado, los partidos políticos y las demás instituciones. Luchar contra la corrupción y reformar el Poder Judicial en el sentido de aumentar su autonomía y estabilidad. El Estado liberado de funciones que no le competen se concentrará en hacer respetar las leyes, mejora la educación y la salud del pueblo.

Hay que mejorar la calidad del liderazgo nacional. Se requiere gente honesta, capacitada, que le explique al país los cambios que se requieren, el modelo de sociedad al que se aspira, los sacrificios que involucran. Finalmente se aspira que la sociedad venezolana comparta valores y metas colectivas que nos conduzcan a la libertad, la democracia y la prosperidad.

5. Agradecimientos

El presente texto es resultado del proyecto de Investigación VISIONES DE LA DEMOCRACIA (A-07-21-22) del Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana Caracas, Venezuela.

Queremos hacer especial reconocimiento al apoyo recibido por la Doctora Miriam Benhayon Benarroch, del Decanato de Investigación y Desarrollo Académico y al Doctor Miguel Alujas, Director de Investigación y Desarrollo de la Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.

Referencias

- Ball, C. (1984) *Libertad. Democracia y corrupción*. Ediciones Libertas.
- Gómez, E. (1991) *Dilemas de una economía petrolera*. Editorial Panapo.
- Gómez, E. (1992) *Hacia una nueva Constitución*. CEDICE.
- Gómez, E. (1986) *La economía venezolana y la cultura de izquierda*. CEDICE.
- Gómez, E. (1992) *La Economía de Mercado. Selección de Escritos y Ensayos. 1985-1991*. Banco Central de Venezuela.
- Gómez, E. (1994) *Una propuesta económica y social alternativa*. CEDICE.
- Gómez, E. (2005) *Una propuesta Ética para Venezuela*. CEDICE.
- Granier, M. (1984) *La generación de relevo vs. El Estado Omnipotente*. Publicaciones Seleven.
- Granier, M. (1987) *Más y mejor democracia*. Grupo Roraima.
- Rangel, C. (1981) *Del buen salvaje al buen revolucionario*. Monte Ávila Editores.
- Romero, A. (1994) *Decadencia y crisis de la democracia. ¿A dónde va la democracia venezolana?* Editorial Panapo.
- Romero, A. (1997) *Disolución social y pronóstico político*. Editorial Panapo.
- Romero, A. (1987) *La miseria del populismo. Mitos y realidades de la democracia en Venezuela*. Ediciones Centauro.
- Sabino, C. (1992) *Hacia una nueva Constitución*. CEDICE.
- Sabino, C. (1999) *El fracaso del intervencionismo. Apertura y mercado en América Latina*. Editorial Panapo.
- Torres, G. (1995) *Entre la realidad y la utopía. ¿Qué debe hacer el Estado?* IESA.
- Torres, G. (1995) *¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? La privatización en Venezuela*.
- Torres, G. (2001) *Un sueño para Venezuela*. Liderazgo y Visión.
- Zuloaga, N. (2001) *Política en pretérito. 40 años de oposición ideológica*. Editorial Panapo.